

## **TU VACUNA NO ME PROTEGE: Derecho a la salud para todas las personas**

Ya ha pasado más de un año desde que la OMS declarara la crisis de la COVID-19 como pandemia mundial. Una pandemia que no entiende de fronteras ni de países, pero sí de desigualdades y de clases sociales, ya que no tiene el mismo impacto en todo el mundo, ni siquiera dentro de un mismo país o región. Es un factor generador de pobreza y desigualdades porque afecta más a las personas con menos recursos y en especial a las mujeres.

Esta pandemia ha puesto en evidencia carencias y vulnerabilidades que no son nuevas, pero que ahora se han hecho más visibles. Más allá del aumento de la brecha entre personas ricas y pobres (los recursos necesarios para afrontar esta pandemia en los países empobrecidos equivalen a la fortuna de los tres hombres más ricos del mundo), la desigualdad también ha quedado evidente en el acceso a las medidas preventivas de la COVID-19. La falta de medios sanitarios, humanos y técnicos en los países más vulnerables ha impedido una respuesta proporcional y adecuada a esta crisis. Mientras los países enriquecidos se han asegurado suministros futuros, el acceso para el resto es incierto. Concretamente, los países enriquecidos, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo.

El Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos, ha sido rechazado por la industria farmacéutica. En su lugar, las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos. Paralelamente, y en consecuencia, varios estudios vaticinan que habrá países a los que la vacunación masiva llegará en 2023. En esta misma línea, en junio de 2021, People's Vaccine Alliance reveló que los países de bajos ingresos tardarían años en vacunar completamente a sus poblaciones al ritmo actual. En la actualidad, menos del dos por ciento de la población africana está completamente vacunada, mientras que, por ejemplo, en la UE más del 70% ya está vacunada.

Desde la Plataforma Zero Pobrezia Donostia reconocemos que las causas de estas desigualdades son multifactoriales y responden a decisiones políticas y económicas, así como a agendas muy alejadas de las necesidades de salud global y a políticas sanitarias que no tienen en cuenta los determinantes sociales que afectan a la salud. Así, reivindicamos:

- Que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no dificulten la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier futura vacuna o tratamiento para la COVID-19. Al mismo tiempo, la adopción de medidas legales que garanticen el acceso a los medicamentos y al material sanitario (o de bioseguridad) a un precio justo.
- Invertir en la universalidad del disfrute efectivo del derecho a la salud, buscando soluciones en la crisis de la deuda y la insuficiencia fiscal para que entre todas podamos salir de esta crisis y repensar el modelo de desarrollo que nos ha abocado a la misma.
- Apostar por políticas públicas que defiendan el bienestar colectivo, que estén diseñadas para satisfacer las necesidades de la población y que se alejen de la panacea de la acumulación ilimitada.
- La política de cooperación de desarrollo como parte de la solución para esta crisis global.

Una vez más, comprobamos que este mundo está interconectado y que es más necesario que nunca trabajar por la construcción de sociedades coherentes con el desarrollo humano sostenible, por la igualdad, la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia; pilares sobre los cuales las ONGD llevamos décadas tratando de construir otro modelo de sociedad.